

Click, afecta tu mundo

Visionarios y Cinep.

Salomón Kalmanovitz

Me preguntan para iniciar este conversatorio cómo afecta la economía las condiciones de paz de una sociedad como la colombiana.

¿Qué tiene que ver la economía con la paz? No creo que estén estrechamente relacionadas. Hay sociedades mucho más pobres que Colombia (Haití) y están en paz o tienen condiciones propicias para desarrollar la industria de las drogas ilícitas (Ecuador) y sin embargo no lo hacen. Hay una rama de la economía, sin embargo, que sí puede explicar el tipo de problema con que se inicia este conversatorio, que es la economía política, que trata de entender el papel que juega el Estado y las instituciones o reglas de juego que organizan una sociedad para obtener riqueza y para que resuelva sus conflictos de manera pacífica.

En Colombia existen condiciones institucionales que han propiciado el conflicto interno en el pasado y han favorecido el desarrollo del crimen organizado, los cuales, combinados, nos han robado la paz política. Esas condiciones tienen que ver con la tributación y el financiamiento adecuado del Estado, con un sistema político que no representa adecuadamente los intereses sociales y económicos, sistema que carece de los balances, frenos y contrapesos que permiten la independencia y eficiencia del sistema judicial, indispensable para resolver conflictos familiares, vecinales, disputas económicas y para castigar con eficacia aquellos que vulneran la ley o a las personas y propiedades que se interponen en su camino. La sociedad colombiana tampoco cuenta con unos organismos de control estrictos e imparciales que frenen los abusos del gobierno que por el contrario influye tanto sobre el sistema judicial que cubre de

impunidad los crímenes de sus funcionarios y lo pone a perseguir a sus enemigos políticos. No existen unos partidos fuertes que compitan pacíficamente por el poder y unos medios de comunicación que proveen una información veraz sobre el comportamiento del gobierno y de sus órganos de control.

El Brookings Institution ha hecho un estudio mundial de países con estados fallidos y Colombia se encuentra con un puntaje sorprendentemente malo después de haber fortalecido financieramente su gobierno desde 1990 y aumentado vertiginosamente su gasto en seguridad, pasando de 2% del PIB ese año a más del 6% en la actualidad. Ellos registran que en extensos territorios del país las fuerzas de seguridad del Estado son desplazadas por organizaciones ilegales y que la justicia es peculiarmente inoperante frente a este fenómeno. El sistema de justicia es ineficiente además porque sus instancias rectoras chocan continuamente, lo que les impide actuar pero aumenta la rentabilidad del crimen organizado pues este resulta exonerado por la tardanza de la justicia en actuar. Existe una corrupción importante en todos los ámbitos del Estado, incluyendo las fuerzas de seguridad y serias fallas en el comportamiento de estas por falta de regulación interna y supervisión externa.

En una escala de 0 (ninguna viabilidad) a 10 (máxima) Colombia obtiene una nota de 5.6 en la puntuación global¹; 5.84 en economía, 5.8 en política, sólo 1.8 en seguridad y 9.1 en bienestar social, algo que debe sorprender a los críticos del gobierno pero que tiene que ver con coberturas de salud garantizada por la Constitución de 1991 y con los programas como familias en acción, guardabosques, etc.

Veamos cada uno de los temas.

¹ El país que encabeza la lista es Somalia con una puntuación global de 0.52, con 0 en economía y en política y con 1.37 en seguridad. Brasil, por ejemplo, obtiene un 7.3 en seguridad contra nuestro 1.8. La República eslovaca obtiene 9.4 en calificación, global, 9.3 en seguridad y 9.7 en bienestar.

Economía: crecimiento mediocre durante los últimos 15 años, menor del 3% anual que deja poco margen para la mejora del PIB por habitante; malos incentivos para aumentar el empleo y desmejora en las condiciones laborales por la falta de garantías en la organización sindical. Creciente desigualdad por la devolución de impuestos a las empresas, cuantiosos subsidios entregados a los que no contribuyen con impuestos al fisco y aumento de los impuestos al consumo y a la nómina. En el estado democrático liberal, la distribución del ingreso mejora después de la intervención del gobierno (impuestos a los ricos, gasto a favor de los pobres), pero por la orientación conservadora de las dos administraciones Uribe la distribución empeora después de impuestos y de gasto público.

Política: desequilibrio entre los poderes a favor del ejecutivo, magnificado durante los dos períodos de Uribe y que ha reducido la autonomía de las cortes y en especial de la judicatura, debilidad de los órganos de control y medios de comunicación cooptados.

Seguridad: aquí se raja radicalmente el país en la llamada seguridad democrática, pues muchas regiones no cuentan con el monopolio de la fuerza en manos de la policía y el ejército y el país continua siendo un corredor estratégico de la delincuencia organizada. Las relaciones entre DAS, policía y ejército y presidencia son conflictivas y abusivas frente a la población, mientras que son perversos los incentivos introducidos en la lucha anti insurgente, como cuotas de cumplimientos para ascensos, las recompensas, los fondos secretos. Existe además la intimidación de opositores y magistrados que tienen como función natural contener los abusos de poder. El narcotráfico ha capturado muchas instancias del Estado en repetidas ocasiones e influye sobre los resultados electorales.

Bienestar: los avances en coberturas de salud y educación explican la alta nota que obtiene el país; los programas de la administración Uribe se caracterizan por su carácter asistencialista que hace depender a las familias que reciben los subsidios de la magnanimidad del presidente y no son entendidos como resultado de sus derechos sociales. Los programas desincentivan el trabajo que ofrecería más dignidad a los perceptores de los subsidios estatales.

La sociedad colombiana está cruzada por condiciones de vida muy precarias para la mayoría de su población. Más de la mitad vive en la informalidad (56% de la población económicamente activa), donde no se paga el salario mínimo ni contribuciones a la salud y a las pensiones y menos las contribuciones parafiscales. Un 12.5% busca trabajo y no lo encuentra. Impuestos al trabajo formal y subsidios al sector informal se combinan como una tenaza que se cierra sobre un mercado laboral cada vez más influido por las reglas de competencia despiadada de la informalidad. Las cooperativas de trabajo han traído las condiciones de baja remuneración y el no pago de prestaciones a grandes empresas y a los ingenios del país. Son incentivos perversos que tienden a debilitar la economía formal e intensifica la informalidad. Se han otorgado exenciones de impuestos para reducir el costo de la maquinaria, contribuyendo a hacer más intensivo en el uso del capital en la producción y en los servicios, lo cual obviamente ahorra trabajo en una sociedad caracterizada precisamente por un enorme sobrante de la población frente a la demanda por trabajo del sector formal.